

LOS PROBLEMAS DE LA DEMOCRACIA EN AMERICA LATINA

Atilio A. Borón

I. *Introducción*

Resulta pertinente examinar, en el bicentenario del natalicio de Simón Bolívar, algunos de los problemas con que se enfrenta el establecimiento de un orden político democrático en América Latina, tema éste de importancia cardinal en el pensamiento y en la acción del gran venezolano. Ahora bien, el tratamiento que habremos de dar a esta cuestión habrá de ser, inevitablemente, genérico y globalizante, pues resultaría imposible tomar en consideración todos los detalles y particularidades que configuran cada caso nacional. Sin embargo, como se trata de una problemática que, aun cuando de modos diversos, afecta a la totalidad de nuestros países, esperamos que estas modestas reflexiones puedan ayudarnos a repensar críticamente los múltiples dilemas y contradicciones que caracterizan al proceso de democratización de nuestro continente.

Hoy, por suerte, asistimos a un renacimiento de la discusión sobre la democracia. Esto no significa que anteriormente no hubiese existido alusión a los temas que configuran la realidad de la experiencia democrática; quiere decir, simplemente, que antes la cuestión de los derechos, y no sólo los civiles y políticos, sino que también los económicos y sociales, y las garantías democráticas eran pensadas e interpeladas al margen de una referencia inequívoca a una categoría, la democracia, que siendo a la vez de carácter ético y científico los integra en un discurso mínimamente coherente. Sería razonable proponer, al menos como hipótesis inicial de interpretación, que la novedad de la

actual coyuntura política de la región está dada por el hecho de que la recuperación de un conjunto de reivindicaciones populares ya no se plantea en su aislamiento y fragmentación, sino que aparecen articuladas en torno a la cuestión de la democracia. Estas demandas, un tanto vagamente formuladas, presentidas más que elaboradas racionalmente, con un carácter inorgánico, son las que hoy, lentamente, se abren paso en medio del derrumbe de los autoritarismos de la región.

Se asiste, de este modo, a lo que provisoriamente podríamos denominar como una primera apropiación popular de la idea democrática en América Latina, tema sobre el cual habremos de explayarnos más adelante. Si indagamos las razones de este acontecer parecería claro que es posible identificar dos órdenes de factores, distinguibles analíticamente pero íntimamente vinculados entre sí. Por una parte, la crisis de las dictaduras latinoamericanas, tanto en Centro como en Sudamérica, que en el transcurso de esta cruel agonía de los últimos años se revelaron como incapaces para resolver los problemas nacionales que supuestamente serían superados definitivamente por su acción autoritaria pero redentora. Ese era al menos el discurso autojustificatorio que aquéllas emplearon cuando usurparon los gobiernos de los distintos países mediante el recurso del golpe de estado. Por otro lado, por la crisis concomitante de una matriz de pensamiento autoritario y conservador que durante los años setentas se encargó de anatemizar cualquier opción socialista o progresista, así como toda propuesta seriamente democrática, atribuyéndoles toda suerte de vicios y de-

formaciones, supuestamente insoportables, tales como el desorden, el activismo y la demagogia, para no citar sino los más usuales, y cuyas consecuencias resentían penosamente las economías de estos países. El estancamiento económico, el atraso, la "indisciplina social" y la inestabilidad política eran pues rutinariamente atribuidos, en esta ofensiva ideológica de los autoritarios, a la dinámica expansiva de la democracia. La dialéctica del conflicto y la controversia y el incansante intercambio de opiniones e influencias que caracterizan al mercado político, en la medida en que expresa fielmente los antagonismos sociales subyacentes, fueron de este modo concebidos como perversiones de la vida pública, rutas seguras conducentes el caos y la anarquía. La recomendación que se desprendía de semejante diagnóstico no podía sorprender a nadie: se requería restaurar el orden político, cualquier orden que posibilitara la continuidad de la acumulación capitalista, no importando tanto sobre qué bases y a qué precio.

II. *La frustración histórica*

Ahora bien, al examinar las perspectivas que se vislumbran en esta nueva fase de democratización en que aparentemente se encuentra América Latina, parecería oportuno efectuar un breve recuento histórico tendiente a identificar algunas de las causas principales por las cuales el ideal democrático no llegó a echar raíces en nuestro continente. Examinando los grandes rasgos de la historia latinoamericana es posible establecer la suerte corrida por los proyectos democratizadores en distintos momentos fundacionales de nuestro pasado y, de ese modo, tomar conciencia de su fragilidad estructural y de la resultante entronización, salvo contadas excepciones, de regímenes de tipo autoritario.

Un primer nudo histórico lo constituyen las guerras de la independencia y las diversas tentativas subsecuentes por organizar un Estado nacional. Esta etapa, más o menos prolongada según los diversos países, asiste al fracaso de los esfuerzos de varios grupos, especialmente de la *intelligentzia* liberal y de ciertas fracciones de la burguesía, por implantar en las nuevas naciones una forma de gobierno acorde con los principios, restrictivos y censitarios, de la democracia liberal. A pesar de la avidez con que aquellos demócratas leían los textos de Rousseau y de los iluministas de la época, la idea de la democracia no se correspondía orgánicamente con ninguna fuerza social dotada de la

suficiente capacidad política, y militar, como para intentar trasladarla al plano de la práctica con alguna posibilidad de éxito. Por eso, el proyecto democrático no logró afianzarse en el terreno de las luchas sociales y permaneció suspendido en el aire, como una aspiración utópica de intelectuales carentes de ligazones orgánicas con las clases y fracciones que en esos momentos estaban librando una lucha mucho más prosaica por controlar lo que quedaba de las antiguas estructuras gubernamentales del imperio español, por mantener su dominio sobre las clientelas tradicionales y su control sobre territorios específicos. La democracia era pues, para decirlo en el gráfico lenguaje del joven Marx, un predicado que carecía de sujeto en el proceso histórico real.

Superada esa fase, y en la medida en que avanza el proyecto de constitución del Estado nacional, unificado y relativamente centralizado, la temática de la democracia reaparece una vez más, pero ya no como eje articulador de un proyecto independentista y anticolonialista, como idealmente aparecía en el pensamiento de los primeros demócratas latinoamericanos, sino como la fórmula política con la cual se legitimaba la recientemente instaurada dominación de las oligarquías regionales. La retórica de la democracia política es ahora consagrada en el discurso de los nuevos amos de la situación nacional, pero su destino es el mismo que corren las ejemplares constituciones que con tanta paciencia fueron calçadas, en algún caso con cierta creatividad, de los mejores originales europeos y, naturalmente, del modelo norteamericano: devenir letra muerta y denunciar de ese modo al flagrante hiato que separaba el país real de las oligarquías latinoamericanas del país legal diseñado por los émulos criollos de los iluministas. La democracia se pervertió cuando bajo su manto los nuevos grupos dominantes trataron vanamente de encubrir sus privilegios y prerrogativas; entonces se degradó a pura formalidad legitimadora del autoritarismo y desigualdad predominantes, sellando así su suerte por un largo período histórico en el cual las masas de nuestro continente irían a identificarla como mero símbolo del dominio oligárquico y como consigna unificadora de instituciones y fuerzas sociales antagónicas a los intereses populares.

Las aspiraciones democráticas que le habían dado tanta fuerza al proyecto independentista se desarticularon en la prolongada etapa de la hegemonía oligárquica. La consecuencia duradera de esta deplorable situación fue que las clases subal-

ternas fundieron en su memoria histórica, en una sola y perdurable amalgama, la explotación económica, el exclusivismo social y el despectismo político del dominio oligárquico con los símbolos y el discurso democrático utilizado por el nuevo bloque dominante para justificar un tipo de sociedad que ya con la primera guerra mundial había entrado en su caso definitivo. Pero junto con el derrumbe inexorable de la vieja sociedad se desplomó también la propuesta de la democracia liberal; ésta, que tendría que haber sido recuperada y superada, fue no obstante percibida por los nuevos sectores sociales emergentes desde el horizonte de visibilidad que les confería su inserción en el país oligárquico. Por lo tanto fue interpretada tan sólo como una decrépita fachada, carente de sustancia socioeconómica, detrás de la cual se había ocultado un largo período de opresión clasista que ya no se iría a tolerar nunca más. Así, desdeñada y repudiada por el sujeto popular, enjuiciada como pura trampa o farsa oligárquica, un argumento que, dicho sea al pasar, encontró sus más entusiastas propagandistas entre los círculos fascistas latinoamericanos, enemigos no sólo del socialismo sino también del liberalismo, la democracia se esfumó del horizonte de reivindicaciones del naciente proletariado y de las capas populares recientemente movilizadas. La afirmación de la identidad, de los intereses y de la autonomía del campo popular, iría a lograrse precisamente por oposición a aquellos que desde las alturas del Estado habían hipócritamente enarbolado las banderas de la democracia liberal. Por consiguiente, las posibilidades y perspectivas que un régimen de ese tipo ofrecía a la lucha popular fueron archivadas por mucho tiempo.

Con la crisis de la dominación oligárquica, la amplia y variada experiencia de los populismos latinoamericanos puso una vez más a la orden del día la cuestión de la democracia: sólo que esta vez como producto de un cuestionamiento al liberalismo y democratismo inscriptos farsescamente en las prácticas del viejo pacto de dominación. Los avances de la democracia social, es decir, de una democratización de la sociedad civil, que no necesariamente iría a encontrar su contrapartida en la reforma democrática de las instituciones representativas del Estado (al menos si se toma como modelo a las formas clásicas del Estado liberal), se lograron luchando contra unos supuestos defensores de la democracia liberal que, en realidad, jamás se interesaron por ponerla en práctica, por la simple razón que atentaba tanto contra sus inte-

reses inmediatos como contra sus prerrogativas y valores más fundamentales. Poco sorprende, pues, el constatar que los avances experimentados por una democratización de carácter inorgánico bajo regímenes como los de Cárdenas o Perón, para no citar sino los más conocidos, adelantos verificados en la fábrica, en la escuela, en la vida cotidiana y que en su conjunto apuntaban hacia la conformación de una sociedad más igualitaria, no fueron hechos en nombre de la democracia liberal, sino que apelando a otro tipo de discursos justificatorios, que una y otra vez aludían al carácter formal y vacío de aquélla. En resumen, la vida política latinoamericana osciló entre una forma democrática despojada de toda sustancia y reducida a puro discurso ideológico de la oligarquía, incapaz de incidir positivamente en el desarrollo de las relaciones sociales de una sociedad elitista y excluyente, y el repudio a esa forma, indisolublemente asociada a su contenido clasista en la memoria histórica popular, precisamente en los momentos que registraban significativos progresos en la democratización fundamental de la sociedad civil. Por ello, el populismo acudió a una legitimación de tipo plebiscitario, dado que la mera simbología de la democracia liberal se hallaba fuertemente contaminada con la supremacía de los viejos intereses oligárquicos.

La crisis de los populismos abrió un espacio para la puesta en práctica de ciertos ensayos de democratización, en la mayoría de los casos tímidos y de corta duración, pero que se hallaban estructuralmente debilitados por la radical desconianza que las masas populares demostraron ante esas iniciativas postpopulistas. De todas formas, estas tentativas fueron implacablemente combatidas por diversas coaliciones reaccionarias que agrupaban a sectores y clases dominantes locales aliadas con intereses imperialistas, y que encontraron en las fuerzas armadas, y ya no en un ocasional caudillo militar, a los ejecutores prácticos que requería una coyuntura tan difícil como la que caracterizaba a varios países de nuestra región hacia mediados y finales de la década de los sesentas. Allí se trató de imponer orden ante un supuesto caos social y económico que según los discursos oficiales comprometían la misma existencia de la nación. Se sabía que, en realidad, ese argumento era un simple pretexto destinado a disimular el empeño por fundar un nuevo "orden" social y político congruente con las necesidades bastante inflexibles del nuevo patrón de acumulación que, desde mediados de la década de los sesenta, venía

imponiéndose con fuerza como producto de la reorganización masiva y a escala global que había experimentado el capitalismo internacional.

La crisis de las dictaduras y su tortuosa descomposición frustraron una vez más las expectativas de la nueva alianza burguesa: este proceso fue acelerado a su vez por la renovada movilización de clases y sectores populares que, luego de una década de sistemática violación de los derechos humanos y de resistir a la exclusión política, no sólo exigen una reorientación del rumbo del desarrollo económico y de las políticas públicas, sino que también instala en la discusión actual el tema de la democracia. De esta manera, ese viejo problema de la teoría política recupera todo su sentido y trascendencia en la actual coyuntura latinoamericana y se convierte en la demanda que sintetiza, en un solo nudo, las múltiples contradicciones generadas por el desarrollo reciente del capitalismo en nuestra región.

III. *La ecuación optimista y las duras réplicas de la historia*

El auge de las dictaduras había encontrado una legitimación pretendidamente científica en las críticas formuladas a ciertas concepciones que las ciencias sociales habían popularizado en la década de los cincuentas y que luego de la Revolución Cubana fueron sometidas a una urgente revisión. Estas formulaciones postulaban un esquema interpretativo de los procesos de cambio social profundamente imbuido por supuestos de carácter iluminista, por una noción ingenua y decimonónica del progreso social y económico, y que entendían a la democracia como un simple subproducto, casi de naturaleza automática, del desarrollo económico. El fracaso de esta fórmula optimista y que basada en una grosera simplificación de la historia de Occidente asociaba la acumulación capitalista con la constitución de la democracia política difícilmente pudo haber sido más rotundo en tierras latinoamericanas. En efecto, en nuestro continente el capitalismo se expandió con rapidez, especialmente después de la segunda guerra mundial; pero a su paso, lejos de consolidarlas, iba desmantelando las escasas y frágiles instituciones democráticas existentes en la región. Esta inesperada realidad, inesperada al menos para aquellos que sostenían una visión idílica de la contradictoria relación existente entre capitalismo y democracia, alentó el florecimiento de nuevas interpretaciones acerca del carácter del desarrollo,

latinoamericano: algunas de izquierda y que, con el correr del tiempo darían lugar a una significativa renovación del pensamiento marxista; otras de derecha, y más bien ligadas a la producción académica de los grandes centros universitarios norteamericanos. Como resultado de estas tendencias se ha intensificado el estudio minucioso y detallado de los complejos nexos que ligan la estructura y funcionamiento del capitalismo periférico con la construcción de la democracia. Ambas corrientes llegaron a conclusiones radicalmente escépticas acerca de las posibilidades de construir un orden político-estatal democrático en el seno del capitalismo dependiente: sin embargo, mientras que las corrientes teórico-interpretativas de inspiración marxista jamás llegaron a cuestionar la deseabilidad de la democracia, aquellas de persuasión conservadora remataban su razonamiento postulando no sólo la futilidad sino la misma inaceptabilidad e inconveniencia de cualquier tentativa orientada a fundar un orden democrático en la periferia. Se concluía, por esta vía, con una abierta apología de los "gobiernos fuertes" apoyada en una sutil y aparentemente objetiva revalorización de las virtudes del autoritarismo político. Del pesimismo y de la relativa carencia de alternativas viables que caracterizaron al pensamiento marxista en la década de los setentas, se pasa, en el caso de los teóricos neoconservadores, a una desenfrenada exaltación del orden hobbesiano impostergablemente requerido por el proceso de reajuste que estaba afectando profundamente el funcionamiento del capitalismo como sistema mundial.

De este modo, la tesis tradicional de la teoría de la modernización que adjudicaba al desarrollo económico el papel de promotor de la democracia política, fue sustituida por una exacta inversión: la vieja secuencia que partía de la economía para llegar a la política, es decir, a la democracia, era reemplazada por otra que ya no hacía del desarrollo económico la condición de la democracia, sino que aquél era ahora entendido como la consecuencia de un orden político maduro y eficaz. La relación causal que iba de la economía a la política fue revertida, y la existencia de una estructura política estable y coherente pasó a ser concebida como un prerrequisito para garantizar la consistencia, continuidad y disciplina requeridos por el progreso material. Esta revalorización de los "gobiernos fuertes" se tradujo, no en todos los casos de igual forma, porque algunos tenían escrúpulos más serios que otros, en una desembozada justificación de las nuevas formas de despotismo estatal

que plagaron la historia reciente de buena parte de América Latina. Ante las acusaciones de complicidad con regímenes universalmente condenados en diversos foros internacionales por sus violaciones sin precedentes de los derechos humanos, civiles y políticos, muchos de los ideólogos conservadores pretendían acallar a sus críticos arguyendo que este inocultable purgatorio autoritario era una fase inevitable, pero transitoria, en la marcha hacia el paraiso democrático y la prosperidad económica.

Sin embargo, esta remanida convalidación tecnocrática y eficientista del despotismo político se desmoronó ante una doble comprobación: por una parte, porque la experiencia reciente demostró la fragilidad de la supuesta correlación entre autoritarismo y crecimiento económico. Este, en realidad, ha alcanzado niveles elevados tanto en regímenes democráticos, como bajo dictaduras militares, y el caso de Brasil es muy claro en este sentido si se compara la *performance* de la economía en los años del *desenvolvimentismo* con aquellos del "milagro económico" bajo la égida militar. Por otra parte, los pregonados éxitos de las dictaduras probaron tener piods de barro y se han venido derrumbando uno tras otro, al punto que un vocero tan notorio como Milton Friedman se ha visto obligado a atenuar sus anteriores desbordes de optimismo y guardar un prudente silencio ante el rápido deterioro del "milagro" chileno, que con tanto entusiasmo publicitara hasta hace algunos pocos años. Derrumbes económicos no menos estrepitosos se verificaron por igual en otros países tales como Argentina y Uruguay e inclusive el propio Brasil, sin duda el caso más exitoso de desarrollo capitalista acelerado en América del Sur, se encuentra en estos días atribulado por la notable endeblez de las bases sobre las cuales se asentó la transformación económica de estos últimos años. Por consiguiente, un examen objetivo de los logros del desarrollo capitalista reciente y de sus ingentes costos humanos, permitiría alcanzar conclusiones sumamente pesimistas acerca de la validez científica del argumento teórico de los autoritarios.

Pero, por otro lado, la justificación tecnocrática y eficientista de las dictaduras tropieza con otro obstáculo y es que la pugna por la democracia no se extingue ante los eventuales éxitos del modelo económico. Tanto en el mundo desarrollado como en la periferia capitalista, la reivindicación democrática surge con renovada intensidad, no exceptuando siquiera, sino al contrario, los casos en los

cuales se había verificado un vigoroso desarrollo capitalista, como Brasil, Irán y Corea del Sur. Y es que más allá de las demandas típicamente económicas y distributivistas, las exigencias de identidad, autonomía y participación, que por cierto también se dejan oír en los países socialistas, como lo verifica hasta la saciedad la evolución reciente de Polonia, se multiplican por doquier y no son susceptibles de acallarse cuando los círculos gobernantes señalan elevadas tasas de crecimiento del producto bruto. Esta tendencia profunda hacia la reivindicación democrática se arraiga en toda una serie de cambios económicos, sociopolíticos y culturales de nuestro tiempo y que encuentran en el conjunto de las clases y capas subalternas sus voceros más caracterizados; a ella se opone otra propensión, también estructural del capitalismo moderno y que refuerza los elementos y estructuras de carácter autoritario y minimiza el peso de las instituciones democráticas y la participación popular. Las transformaciones acaecidas en América Latina en los últimos veinte años han contribuido a intensificar estas aspiraciones libertarias y pluralistas y a encarnarlas en sujetos históricos concretos, cuyas reivindicaciones democráticas han venido en aumento en tiempos recientes. La modernización capitalista, los cambios en la estructura de clases y en las formas sociales predominantes han hecho prácticamente incontenible y arrollador este avance democrático que se expresa diversamente en los distintos países de la región: de una manera en Brasil y de otra en Chile, y en la Argentina de modo distinto que en Uruguay, y en El Salvador y Nicaragua de forma diferente a la conocida en México y Venezuela, pero la raíz profunda de todos estos procesos es la misma.

Por consiguiente, la democracia resurge como una condición necesaria para que se verifique una reorientación de la modalidad de desarrollo vigente en el capitalismo periférico, de suerte tal que pueda adoptarse una dirección congruente con las necesidades de las grandes mayorías de la población. Es ocioso insistir en el hecho indiscutible de que todo proceso de desarrollo supone opciones de carácter político y no solamente de tipo técnico, como a veces se pretende hacer creer, y que para adoptarlas es preciso atender a los intereses de los diversos grupos y sectores sociales y, muy particularmente, de las clases sobre cuyos hombros habrá de caer el peso principal del esfuerzo económico. Es así que se reactualiza un viejo principio democrático, "no tributación sin re-

presentación", pero replanteado ahora en términos coherentes con la nueva situación histórica en que dicha reivindicación es formulada. Esta se produce en un contexto bien diferente a la Inglaterra del siglo XVIII, en momentos en que en América Latina se asiste al derrumbe de los neautoritarismos y en donde ya no caben dudas de que existe una incompatibilidad radical entre los proyectos "fundacionales" de las dictaduras militares del cono sur, orientados a crear, mediante sus políticas neoliberales un nuevo tipo de sociedad burguesa dependiente, transnacionalizada y autoritaria y la construcción de un orden político-estatal de carácter democrático. El purgatorio de hoy, el dominio de los oligopolios, la distorsión de la planta productiva, la contracción de los salarios y la pauperización de grandes sectores de la población, y la represión política desenfrenada no conducen, y la evidencia reciente es contundente sobre este particular, al paraíso que alegremente se había prometido para el día de mañana. Los horrores del purgatorio fueron en vano.

IV. *Peripecias de la democratización: estructura social e historia*

Si esto es así, y recuérdese que aquí apenas si hemos podido sintetizar en grandes líneas el complejo y multifacético proceso histórico sufrido por América Latina en los últimos años, cabría ahora examinar los distintos aspectos relacionados con las perspectivas que se abren en esta coyuntura de posible democratización. Se trata, aunque parezca innecesario aclararlo, de ensayar un ejercicio de especulación controlada en torno a ciertos rasgos y procesos que podrían incidir sobre los límites y posibilidades de esta nueva tentativa democratizadora.

Desde ya es preciso descartar toda expectativa demasiado optimista, pues las dificultades que se alzan para frustrar la construcción de un orden democrático en América Latina sean formidables, un verdadero muro de Jericó, que no habrá de derrumbarse, por cierto, ante el sonido voluntarista de la trompeta popular.

En primer lugar, conviene tener presente que, siempre y en todas partes, la democratización de las instituciones políticas y sociales ha sido un proceso de avances y retrocesos, de construcción y destrucción, jamás un ascenso lineal e ininterumpido hacia la cumbre democrática. Inclusive en el capitalismo desarrollado no existen garantías que impidan una reversión de las democracias burgue-

sas a formas y niveles de funcionamiento que algunos, un tanto ingenuamente, consideran como logros irreversibles. Las experiencias de la crisis de la república de Weimar en Alemania y de la Italia de la primera postguerra son pruebas harto eloquentes como para enfriar los optimismos más desorbitados. Por otra parte, son numerosos los estudiosos que no descartan la posibilidad de una involución autoritaria en las democracias burguesas más antiguas y consolidadas, como la inglesa y la norteamericana. Por lo tanto, es preciso recordar que la supervivencia de la democracia, allí donde ésta ha logrado establecerse, o su conquista, en el capitalismo periférico, es fundamentalmente obra de las clases y capas populares, de su secular lucha por construir una sociedad más justa e igualitaria. Depende, en consecuencia, de la particular correlación de fuerzas que se verifica en distintos momentos de la vida nacional y de la capacidad de las clases subalternas para cristalizar esos delicados equilibrios en un conjunto de instituciones que garanticen eficazmente la perdurabilidad de sus conquistas. Mirada desde esta perspectiva histórica y estructural, la democracia aparece despojada de la envoltura fetichista que la ha llevado a ser considerada como una suerte de instancia inmutable que flota enigmáticamente por encima de la lucha de clases y de las sucesivas coyunturas que configuran la historia de una formación social concreta. Es preciso pues "historizar" la realidad de la democracia y percatarnos de que, para su triunfo se requiere de "soportes" estructurales, es decir, de agentes sociales concretos que la adopten como valor fundamental de su proyecto de reconstrucción social. Es por ello que la democracia se encuentra traspasada por tensiones y que sus logros son siempre provisionarios, siempre susceptibles de ser desmentidos por la historia en la medida en que el curso de los antagonismos sociales permita el ascenso de una coalición autoritaria al poder. La imagen optimista e iluminista de la "irreversibilidad" de la democracia debe ser sustituida, por lo tanto, por una visión mucho más realista y que nos torne sensibles a la fragilidad inherente de todo arreglo democrático.

Por otra parte, y dejando de lado las restricciones más generales enunciadas en el párrafo anterior, resulta pertinente señalar otra fuente de obstáculos que se interpone en esta nueva ola redemocratizadora que aparentemente envuelve a la América Latina: mientras que por estas latitudes se ha reavivado la aspiración democrática, en el capitalismo desarrollado se ha vuelto un lugar común

el discurso sobre "la crisis de las democracias". Una serie de politólogos, sociólogos y economistas de filiación neoconservadora, críticos del socialismo y del capitalismo keynesiano, han logrado imponer un nuevo "sentido común burgués", proponiendo un esquema de interpretación de la crisis económica y política actual del centro capitalista, el cual parecería basarse en una reelaboración de algunas de las más conocidas tesis marxistas sobre este asunto. Como es bien conocido por todos, Marx había señalado la incompatibilidad existente entre el funcionamiento del modo de producción capitalista y la lógica de la democracia política. La reproducción de los mecanismos sociales que posibilitaban la extracción de la plusvalía era amenazada por la expansividad inherente al régimen democrático. La solución histórica que el Estado capitalista halló para esa contradicción consistió en limitar el juego político a los moldes más o menos estrechos de la democracia burguesa, es decir, una democracia fundada en la exclusión de las mayorías y en donde la plenitud de los derechos políticos se aseguraba tan sólo para unos pocos, ricos y poderosos. De esta forma se logró un compromiso, un equilibrio inestable entre las necesidades de la acumulación capitalista y las exigencias de una cierta participación política impostergables para un régimen que se fundaba en la libertad del trabajo asalariado. La democracia burguesa se caracterizó, pues, por su vocación excluyente, la cual a su vez adquirió un status legal en los diferentes regímenes electorales que consagraban la privación del derecho a sufragio a distintas categorías de la población; y por su naturaleza formal y abstracta, rasgos éstos que frenaban la dinámica expansiva de la participación desde la base. De este modo, se lograba congelar el proceso democrático y demarcarlo de tal suerte que comprendiese al conjunto de clases y estratos sociales integrados al bloque histórico de la burguesía: para éstos funcionaba la institucionalidad liberal-burguesa; para el resto, la dictadura del capital.

Sin embargo, la primera guerra mundial, la revolución rusa y la gran depresión de 1929, tres eventos que en escasos quince años marcaron definitivamente el rumbo por el cual iría a transcurrir la historia de nuestro siglo, acicatearon las luchas sociales de tal modo que hicieron saltar la camisa de fuerza de la democracia burguesa. La ciudadanía, esa condición privativa de unos pocos, casi un privilegio más que un derecho, tuvo que ser extendida, siempre a regañadientes al conjunto de cla-

ses y capas subordinadas. De este modo, el viejo estado burgués, liberal, victoriano, aristocrático, que había hecho del *laissez faire* un verdadero dogma (jamás respetado, por cierto, pero eficaz a nivel ideológico), fue reemplazado mediante una diversidad de caminos y trayectorias profundamente influidas por las tradiciones de lucha popular prevalecientes en cada sociedad concreta, por una nueva forma política que, a diferencia de la que le había precedido, se asentaba sobre el terreno, a la vez más sólido pero potencialmente más amenazante, de la integración de las masas a la vida política y de la subsecuente legitimación popular. Se produce de esta forma la transición desde el viejo estado "gendarme nocturno" al estado "benefactor y empresario", denominaciones éstas que, naturalmente, hay que tomar como simplificaciones pragmáticas de realidades muy complejas. Las contradicciones entre capitalismo y democracia, como todo, no afloraron a pesar del carácter masivo y estructural del dominio burgués en el capitalismo maduro. Muchos intelectuales y fuerzas políticas de izquierda se desilusionaron y pensaron que los análisis de Marx estaban equivocados y abandonaron el socialismo. Sus críticos liberales se apresuraron en anunciar al mundo la buena nueva: se habían terminado las luchas de clases y la época de las ideologías se enfrentaba a su ocaso definitivo. Sin embargo, la historia posterior del capitalismo metropolitano habría de propinar un duro revés a aquellos profetas de la nueva sociedad sin conflictos de clases y sin ideologías, puro imperio de una supuesta racionalidad técnico-económica. En realidad, si las contradicciones entre Estado democrático y modo de producción capitalista no estallaron con violencia y se mantuvieron latentes fue porque el período de la segunda postguerra constituyó la época de oro de toda la historia de la civilización burguesa, aquella en la cual el conjunto de las economías capitalistas avanzadas, y que conforman el núcleo del sistema mundial, crecieron a un ritmo y con una intensidad completamente inéditas. Sólo ese período de auge sin precedentes pudo ocultar las tensiones que subyacían al funcionamiento de la democracia burguesa, y esto gracias a la extraordinaria expansión del Estado intervencionista que, en esta fase comúnmente conocida como la de "recomposición keynesiana del capitalismo", asumió funciones de vital importancia como regulador y estabilizador del ciclo de acumulación y de la lucha política de clases. Pero, una vez agotada esta etapa dorada, los políticos e intelectuales ads-

critos al dominio burgués no tardaron en percataarse de la oposición que separaba capitalismo y democracia, es decir, esta democracia de masas, y en proponer una superación de este *impasse* estructural por la vía de la mutilación de la segunda, de su sacrificio en aras de la continuación del proceso de acumulación. El capital se hace marxista, usando una feliz expresión de Antonio Negri, para justificar una "solución" conservadora, e inclusive en algunos casos reaccionaria, de la crisis. De allí que propongan, como salida a la crisis actual caracterizada por la recesión e inflación simultáneas y por ser la más grave desde 1929, una estrategia de disciplinamiento de la sociedad civil, neutralizando y controlando sus demandas, especialmente las de las clases subalternas, de forma tal que se evite la "sobrecarga" del Estado y el "recalentamiento" de la economía. Por lo tanto, se impone revalorizar a la apatía política, la indiferencia ciudadana, la no-participación cívica, la presidencia estatal ante los problemas económicos y sociales, la resurrección del culto al mercado y muchos otros rasgos que antaño fueran combatidos como evidencias de un déficit en la "cultura cívica" de las sociedades periféricas y que ahora son objeto de un redescubrimiento que revela su funcionalidad para la preservación del dominio del capital.

El ataque de los "excesos" democráticos, paralizantes de la vitalidad del mercado desemboca, en algunos casos más explícitamente que en otros, en una apología del gobierno autoritario: la democracia, en última instancia, se transforma perversamente en una estructura "ingobernable" y será a partir de este paradigma de la ingobernabilidad con que se evaluarán las posibilidades y la congruencia de la democracia con las exigencias cada vez más rigurosas de la reproducción del capital. Pero es precisamente allí donde la crítica inspirada en Marx propone un avance, a la vez cualitativo y cuantitativo, de la democracia, capaz de cortar radicalmente el nudo gordiano de la supremacía burguesa, que los teóricos neoconservadores recomiendan la subordinación del juego democrático a los imperativos de la producción. La democracia sólo sería posible y deseable mientras no se convierta en un elemento disfuncional al proceso de acumulación. Del reconocimiento de aquella contradicción tempranamente develada por Marx se salta a la recomendación hobbesiana, y el despotismo político es invocado como milagrosa solución para la salvaguarda de la civilización burguesa en el mundo desarrollado. Este diagnóstico descarnadamente pesimista acerca

del futuro de la democracia se torna inclusive más sombrío cuando la visión neoconservadora se dirige a las sociedades dependientes, puesto que ha sido en la periferia del sistema capitalista donde, en el ejercicio de la democracia, los sectores populares han exhibido una menor propensión a la moderación y la prudencia políticas en el planteamiento de sus demandas y en donde las instituciones representativas se han visto incapaces de frenar y canalizar los impulsos desbordados de una tumultuosa ciudadanía. Aquí es preciso señalar que esta perspectiva se ha transformado en el enfoque predominante en los círculos dirigentes del capitalismo maduro, una verdadera nueva ortodoxia ideológica que es congruente con el ascenso político de la derecha en esas sociedades, como lo demuestra el giro del electorado en favor de candidatos como Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Este "clima de opinión" configura sin duda un obstáculo más en la larga marcha de América Latina hacia la democracia, pues nuestro movimiento histórico no sincroniza con el del capitalismo metropolitano, a pesar de lo cual esta reivindicación democrática debe insertarse en un contexto mundial en donde los centros dominantes se han tornado crecientemente escépticos acerca de las virtudes de la democracia en sus propios países, y francamente antagónicos a ella cuando se intenta ponerla en movimiento en las sociedades dependientes. Esta desconfianza radical hacia la democracia en la periferia queda sobradamente demostrada por el curso de la política de la Administración Reagan hacia América Latina y por las elaboraciones teóricas hechas por algunos de sus voceros, como la Embajadora Jeanne Kirkpatrick, por ejemplo, encaminadas a fundamentar la preferencia por "dictaduras" amigas, es decir, regímenes que han abdicado de su soberanía en favor del amo hemisférico, y los reparos y objeciones que le merecen las democracias, concebidas invariablemente como potencialmente hostiles a los intereses norteamericanos.

Antes de abundar más sobre el papel que el imperialismo norteamericano está llamado a jugar en nuestra región, parecería oportuno hacer una última reflexión sobre la cuestión de la "ingobernabilidad" democrática, puesto que es evidente que más allá de la intención político-ideológica de los proponentes de esta tesis existen ciertos antecedentes reales que no pueden desconocerse. En efecto, la ingobernabilidad es una posibilidad de toda sociedad compleja y burocratizada, como son las nuestras. Este no es un fenómeno exclu-

sivo del capitalismo maduro, sino que también se presenta en el ámbito de la periferia, y sería suicida para el movimiento democrático latinoamericano cerrar los ojos ante esta realidad. La creciente complejidad de la vida social y de los procesos de acumulación de capital se requieren de una expansiva atención estatal que inexorablemente genera estructuras burocráticas cada vez más invasoras y opresivas: esta situación, combinada con un alto nivel de movilización y participación políticas, sin las cuales no puede seriamente hablarse de democracia, plantea todo un conjunto de problemas de coordinación socioeconómica y administrativa que sería insensato menospreciar. La historia pasada y reciente de América Latina demuestra hasta el cansancio que la vitalidad de la sociedad civil y el carácter arrollador del movimiento popular, plenamente comprensible si se recuerdan las reiteradas represiones y frustraciones a que fuera sometido desde su aparición en la escena política, pueden configurar situaciones en las cuales el frágil y precario equilibrio político-institucional sea alterado precisamente por aquellos sectores más seriamente empeñados en la construcción de un orden democrático. En este complicado ajedrez político es preciso tener en cuenta, además, que uno de los participantes, el jugador que representa a la alianza de la burguesía con el imperialismo y el estamento militar, ha dado reiteradas muestras de que su vocación profunda es la imposición de un orden autoritario congruente con sus intereses, y que, por consiguiente, aceptaría la democracia sólo si ésta surgiese como el desenlace de una correlación de fuerzas abrumadoramente favorable a su imposición. Para ese "pacto de dominación", como adecuadamente lo denominara Fernando Henrique Cardoso, la democracia sólo podría ser tolerada como consecuencia de una derrota política. Pero esto coloca al juego democrático bajo la amenaza constante del sabotaje de esos sectores, facilitado en nuestro continente por el círculo vicioso que de la precariedad de la democracia conduce al agigantamiento del peso social, económico, político y cultural de sus enemigos, y por el funcionamiento de la economía capitalista, extraordinariamente sensible a las iniciativas de la burguesía. En efecto, una actitud apenas escéptica ante un nuevo gobierno surgido de un proceso electoral democrático puede traducirse en una significativa baja de las inversiones o en una maciza fuga de capitales, lo cual tiene una enorme repercusión sobre la estabilidad política y económica de la nación, mucho

mayor, por ejemplo, que una huelga general. La experiencia del gobierno de Mitterrand en Francia es sumamente ilustrativa al respecto, igual que la del Chile de Allende, y no hace falta mucha imaginación para anticipar lo que podría ocurrir en América Latina. Si a esto sumáramos el posible desborde del movimiento popular, su fraccionamiento y sus dificultades para consolidar una dirección orgánica y unitaria, especialmente bajo el peso de una profunda crisis económica y política y de un hostigamiento del capital monopolístico internacional y sus aliados, tendríamos como resultado que el ajedrez democrático contra la burguesía no sería jugado por una cabeza, sino por varias, que, además, compiten entre sí. Es obvio, pues, que el desenlace de este proceso bien podría ser una situación objetiva de "ingobernabilidad" susceptible de ser espléndidamente aprovechada por la alianza burguesa para una nueva tentativa de "normalización" autoritaria. La fase final del gobierno de Isabel Perón en la Argentina y la experiencia de la actual reconstrucción democrática en Bolivia, son ejemplos que convendría analizar en profundidad para evitar una reiteración de errores capitalizables por el adversario. No se trata, por consiguiente, que las fuerzas populares y democráticas desconozcan los amenazantes retos planteados por la burocratización y complejización de las sociedades modernas, algo que es difícil de hacer después de Max Weber. Pero, de lo que se trata es de evitar pensarlos desde una perspectiva que asuma implícitamente la conservación de la sociedad actual, que es el supuesto básico de las tesis de la ingobernabilidad. Si ésta ocurre, en última instancia, es porque grandes mayorías de nuestras sociedades aspiran al disfrute de condiciones socioeconómicas y al goce de derechos políticos imposibles de garantizar en el marco del capitalismo. Es preciso, en consecuencia, recuperar esa negatividad de la sociedad civil y producir las transformaciones estructurales que requiere América Latina. Es evidente que la democracia debe ser gobernable, pero esto, siendo necesario, no es suficiente para agotar las reivindicaciones democráticas de las clases populares. La democracia también debe ser un instrumento idóneo para la construcción de una sociedad mejor: la ingobernabilidad es un síntoma, importante pero no más que eso, de un malestar profundo originado por la persistencia de un régimen de producción intrínsecamente injusto.

Hemos ya señalado dos series de obstáculos que pueden interponerse en la renovada marcha

de América Latina hacia la democracia: los avances y retrocesos propios del proceso de democratización, por un lado, y la complejidad y burocratización de las sociedades modernas por el otro, lo que contribuye a la creación de un clima de opinión adverso hacia la democracia en los círculos dominantes del capitalismo metropolitano. Un tercer factor, íntimamente vinculado con los anteriores, se deriva de la inserción de nuestro continente en el sistema internacional y, más específicamente, del papel históricamente desempeñado por el imperialismo norteamericano. No cabe la menor duda de que, más allá de los posibles cambios en el elenco gobernante, derivados de los resultados de las elecciones estadounidenses de 1984, la presencia y el accionar del imperialismo es un obstáculo objetivo que puede frustrar las aspiraciones democráticas en ascenso en la región. Sea por su interés en preservar "áreas naturales de influencia", o por su obsesión en defender la "seguridad nacional", presuntamente amenazada por los más pequeños países del área, o simplemente por su secular predisposición a defender y apañar los intereses de las grandes corporaciones transnacionales, el imperialismo norteamericano, como en otro tiempo lo hiciera también el británico, ha desempeñado un papel funesto en la historia reciente de América Latina. Se trata de algo tan archiconocido que sería ocioso entrar en mayores detalles: su papel en la desestabilización del régimen democrático de la Unidad Popular en Chile y su influencia decisiva en la destrucción de la democracia uruguaya ilustran con elocuencia lo que se puede esperar en el futuro. Su actual política hacia Centro América, además del mantenimiento del bloqueo a Cuba, son otras tantas reiteraciones de lo anterior y de lo que puede acontecer con países cuyos pueblos sean capaces de hacer triunfar un proyecto democrático.

Un último factor a tener en cuenta y el cual, dado lo extenso de esta presentación vamos apenas a mencionarlo, es el siguiente: teniendo en cuenta la naturaleza de la estructura de clases del capitalismo periférico, ¿cuáles podrían ser los sujetos históricos de la actual lucha por la democracia? Creemos que la respuesta a esta interrogante sólo la podrá ofrecer la marcha concreta de la historia: aquí podemos tan sólo esbozar una reflexión necesariamente parcial, útil tal vez para descartar ciertos agentes, pero dubitativa en lo que toca a la proposición de los nuevos sujetos. En efecto, en la historia de Occidente, las clases y fracciones capitalistas jugaron un papel significa-

tivo en la constitución de la democracia burguesa. No ocurrió lo mismo, sin embargo, en América Latina, donde la sobredeterminación del imperialismo y la supervivencia de viejas clases terratenientes impidieron que el modesto impulso democrático de la burguesía, que es preciso diferenciar de su aspiración liberal, adquiriese la contundencia necesaria como para fundar un estado democrático en el capitalismo periférico. Este fracaso, reiterado hasta la saciedad en América Latina, para no hablar de Asia y África, revela la ineptitud de una burguesía débil, temerosa y más propensa a llegar a soluciones parciales y a acuerdos con sus socios mayores que a acompañar, y mucho menos liderar la marcha hacia la democracia. Por lo tanto, si en la experiencia europea y norteamericana, la democratización contó con la dirección o al menos el apoyo, aunque haya sido un tanto reticente en ciertas coyunturas, de las clases burguesas en nuestro continente se hace contra la oposición de sus contrapartes criollas. La lucha por la democracia es, al mismo tiempo, una lucha contra el capitalismo, que en el ámbito periférico ha probado repetidas veces ser incapaz de propiciar, o coexistir con una democratización siquiera parcial de esas sociedades. Una vez que se toma nota de esta capitulación de las burguesías periféricas y de la notable heterogeneidad de las formaciones sociales latinoamericanas, el problema de los sujetos históricos de la democracia se despliega en toda su significación. Si a esto sumamos la relativa debilidad de la clase obrera, daña la forma particular adoptada por el desarrollo capitalista en el área y que ha generado una enorme masa subproletaria que se aleja, por su estructura, conciencia y organización, de la imagen clásica del proletariado proyectada por los clásicos marxistas; la reiterada incapacidad de la pequeña burguesía para plantearse un proyecto orgánico de democratización sin caer víctima de sus propias ambigüedades estructurales; la nulidad de los modernos sectores medios y su ausencia de fisonomía política; y la orfandad ideológica y organizativa del campesinado latinoamericano, podríamos concluir que el tema del sujeto, o los sujetos, en plural, de la democracia habrá de ser uno de los llamados a concitar una apasionada discusión en los años venideros, y para el cual parecería no haber una fórmula preconcebida a la cual recurrir. Como decíamos más arriba, será la historia, el proceso de lo real, la que habrá de decir la última palabra. Por ahora, contentémonos con saber que éste será uno de los asuntos de la agenda futura.

V. *Estilos de desarrollo y tipos de democracia*

El reto que enfrenta, pues, la utopía democrática en América Latina es formidable, tanto más si se toma en cuenta la larga historia de fracasos de los diversos proyectos ensayados en la región. Para evaluar las alternativas que se abren en esta coyuntura, es preciso recordar las consideraciones precedentes y, además, examinar la posibilidad de que se establezcan nuevas formas de relacionamiento entre economía y política en el capitalismo periférico. Acerca de este asunto es oportuno anotar que en fechas recientes ha sido Raúl Prebisch quien reactualizó ciertos aspectos de la crítica marxista a la relación entre capitalismo y democracia. En sus trabajos más recientes ha señalado que el capitalismo periférico, fundado sobre una apropiación distorsionada del excedente que se expresa en la coexistencia de un consumo privilegiado de las élites y de un infraconsumo de las masas, se caracteriza por una exacerbación irrefrenable de la pugna por el reparto del excedente que es susceptible de conducir, por distintos caminos, a tres situaciones límites: inflación descontrolada, recesión o estancamiento. Ante esas coyunturas de disolución de los parámetros fundamentales de la vida económica, una alianza reaccionaria de fuerzas sociales puede intentar una "resolución" autoritaria de la crisis que implique la supresión de la lucha por la distribución del excedente. De este modo, se clausurarían los mecanismos de expresión y canalización de los antagonismos sociales, o, lo que es igual, la suspensión del juego democrático con el propósito de perpetuar la desigualdad y el privilegio consustanciales al capitalismo periférico.

Sin embargo, el sacrificio de la democracia en aras del capitalismo no ha dado muy buenos resultados en América Latina: el costo de la opción, en términos de la represión necesaria para imponerla, es cada vez mayor y sus logros tienden a ser cada vez más efímeros, generando, además, nuevas y peores crisis. Tradicionalmente nuestros países se han visto atrapados por una dialéctica perversa que pasa de una "democracia populista", preocupada por la distribución del excedente, pero que fracasa cuando llega la hora de garantizar el crecimiento de la economía, a un autoritarismo tecnocrático, o el "fascismo de mercado" como lo denominara Paul Samuelson, que, al poco tiempo se hunde, más allá de su completa inadmisibilidad ética, en el pantano de su propio irrealismo. Un imperativo de la hora actual es,

pues, la ruptura con este círculo vicioso, pero esto supone un reexamen de la naturaleza del vínculo entre economía y política en el capitalismo dependiente, y, consiguientemente, del nexo que une el desarrollo con la democracia.

Para comenzar, parecería claro que no existe una modalidad única de desarrollo, ni siquiera dentro del capitalismo. Hubo muchas formas concretas de desarrollo, muchas fórmulas puestas en práctica por el grupo de países que hoy día constituyen el capitalismo maduro. No hay, pues, un único patrón, ni un solo estilo posible, máxime en nuestro tiempo cuando la profusa experiencia histórica permite sopesar los méritos y posibilidades de una amplia gama de variedades no-capitalistas de desarrollo. Por lo tanto, es preciso rechazar la impostura tecnocrática que plantea como camino único lo que es el resultado de una opción política que establece quiénes habrán de ser los beneficiarios, directos o indirectos, del modelo de desarrollo adoptado, y quiénes habrán de ser sus víctimas, es decir, aquellos cuyo los hombros se descargue el costo del mismo. No hay por lo tanto opciones técnicas y "apolíticas"; es preciso asumir la politicidad inherente al desarrollo, que no se trata simplemente de un asunto relacionado con el aumento de ciertos índices, sino que expresa un proyecto impulsado por una alianza de clases y grupos sociales y que cristaliza en un conjunto de decisiones relativas a intereses y valores. Importa, por lo tanto, examinar mediante qué mecanismos sociales se impone una determinada modalidad de desarrollo y qué consecuencias tiene para la vida de la nación. En este sentido es innegable que el patrón de desarrollo en vigencia en América Latina desde mediados de la década de los sesentas, es decir, un modelo concentrador, excluyente, predatorio, consumista y autoritario, es terminantemente incompatible con el funcionamiento de un orden democrático, y no sólo en el capitalismo periférico. Este modelo, además, fue impuesto en nuestro continente por el imperialismo y las clases, fracciones y grupos sociales aliados a su hegemonía porque es el que maximiza su tasa de ganancia y garantiza la reproducción de sus intereses. Existen, sin embargo, otras opciones que maximizan los intereses de otros actores sociales, el conjunto de las capas y clases subalternas, y que se plasman en un estilo de desarrollo con capacidad para distribuir ingresos, generar empleos, elevar los niveles de vida de la población y que, por añadidura, estimulan la vida democrática al crear condiciones favorables a su ejercicio.

Lo que se requiere, en consecuencia, es que las fuerzas democráticas tengan la osadía de cuestionar radicalmente el razonamiento burgués y, yendo a la raíz de las cosas, plantear de un modo completamente distinto el problema de las relaciones entre desarrollo y democracia. Es preciso producir la ruptura ética con aquella matriz de pensamiento, groseramente economicista, como es bien sabido y rechazar sin concesiones el argumento que se interroga acerca de si la democracia es conveniente, deseable o funcional para el desarrollo económico, entendido éste como si fuera algo unívoco. De lo que se trata, en realidad, es de impulsar otra alternativa axiológica, otra opción política que revelaría la madurez de las clases y capas subalternas en la construcción de su propia hegemonía, de su propia concepción del mundo como observaba Antonio Gramsci, y que se define por la negación radical de la de sus adversarios. Y esta opción debería, partiendo de lo político, de la concepción de lo que sería, en la mejor tradición de la teoría política clásica, la buena sociedad y el buen Estado, examinar críticamente cuáles podrían ser los estilos de desarrollo que mejor favorecen la consolidación de la democracia y cuáles aquellos que la destruirían. El desarrollo, y con él toda la vida económica, serían así redimensionados a su verdadera estatura: un medio para que la sociedad alcance sus fines más elevados y no el fin último y el valor supremo de toda la vida social. Un medio que maximice el bienestar de las mayorías, la educación de la población, que mejore su salud y su alimentación, que garantice una vivienda digna, y que, además, fortalezca la vida democrática.

Esto significa que el foco de la opción estratégica del movimiento popular se encuentra en la democracia, no en el desarrollo, invirtiendo de este modo la relación clásica del pensamiento burgués, y recordando además el carácter falaz del dilema que obligaría a escoger entre democracia y desarrollo, porque hay muchos estilos de desarrollo y además porque los valores inscritos en la democracia no pueden ser subordinados por aquellos consustanciales al desarrollo, en cualquiera de sus variantes.

Claro está que el repudio al pseudodilema "democracia-populismo e ingobernabilidad" *versus* autoritarismo-orden y eficiencia" es imposible si no se plantea, al unísono, la pregunta sobre qué tipo de democracia podrían proponer los sectores populares. Por lo tanto, no se trata sólo de inquirir sobre el estilo de desarrollo, sino también sobre el

estilo de democracia posible en nuestro continente.

Para ello, es preciso aceptar, como recordaba don José Medina Echavarría, que la democracia se fundamenta en sus propios valores y se justifica independientemente de su relación con el desarrollo económico. Pero es preciso ser igualmente conscientes de que en estos momentos no se trata simplemente de reflotar una democracia puramente formal, anquilosada, reducida a ámbito inoperante donde se intercambian influencias sociales como en un mercado político. Es preciso que, a la vez que se exige otro patrón de desarrollo se demande también otro estilo de democracia, una superación de la clásica y dieciochesca democracia burguesa. Esa otra democracia, activa, participatoria, expansiva, liberadora, implica la superación dialéctica, integrándolos pero sin negarlos, de los componentes del paradigma clásico, tales como la ciudadanía, la representación parlamentaria, la división de poderes y los derechos y garantías democráticas. Pero es preciso ir más allá de estos límites del Estado democrático: después de la gran depresión de 1929 y de la recomposición keynesiana de los Estados y las economías capitalistas, las fórmulas del constitucionalismo democrático-liberal fueron rebasadas por el avance de los acontecimientos históricos. La lucha por la democracia en América Latina hoy no puede limitarse a aquellas metas, en la actualidad claramente insuficientes a pesar de su importancia intrínseca: si en países como Venezuela y Costa Rica la lucha democrática tiene sentido es precisamente por asegurar la construcción de un régimen político que no sólo garantice los derechos ciudadanos, sino que también sea eficaz agente de transformación económico-social. La idea democrática se ve así sometida en el mundo moderno a un doble imperativo, desconocido por los demócratas de antaño, y que los hubiera sorprendido de sobremanera: por una parte, se debe construir un orden político-estatal legitimado por la voluntad popular; y, por el otro, y ésta es la novedad de nuestro tiempo, ese orden debe ser un instrumento colectivo eficaz para hacer frente a los retos de la transformación y el desarrollo. Se requiere, por consiguiente, tanto de legitimidad política como de eficacia técnico-administrativa.

La democracia aparece pues, en este sentido más amplio, como fórmula político-institucional, aquel marco legal cuyo mérito se pudo apreciar cuando fue destruido por los regímenes autoritarios de los setentas, y como expresión más pro-

funda de la vitalidad, activación y movilización de la sociedad civil, de su vocación de autonomía y control del Estado y de su capacidad para gestionar la cosa pública. Sin este componente participatorio y libertario no hay democracia válida para la América Latina de hoy, pues nadie estaría dispuesto a la lucha por un ritual ciudadano carente de sustancia e incapaz de asegurar y promover un avance social significativo.

Somos conscientes de que una propuesta de este tipo habrá de encontrar muchos obstáculos en su camino, los tiempos en que vivimos son inhóspitos para la democracia, pero la frustración de los ritualismos pseudodemocráticos y los horrores del neautoritarismo imponen a los pueblos de la región el reto de encontrar fórmulas nuevas para la resolución de sus viejos problemas. Nuestro continente se encuentra hoy enfrentado a ta-

reas de singular trascendencia y cuyas cualidades y estilos de resolución habrán de definir el rumbo histórico por mucho tiempo. Los desafíos son apabullantes de sólo enumerarlos: la deuda externa, el atraso, la pobreza, la desigualdad, la injusticia, el despotismo político, la opresión imperialista, la guerra, para no citar sino los más relevantes. Pero creemos que es precisamente en estas coyunturas críticas cuando los pueblos sacan lo mejor de sí para sentar sobre nuevas bases su proyecto histórico. El desafío es enorme y los adversarios muy poderosos, pero nos parece que el fracaso de los autoritarismos y las insatisfacciones generadas por un estilo de desarrollo oligopólico y despótico han posibilitado la apertura de nuevas rutas en la imaginación y en la práctica políticas de las clases populares de América Latina.